

Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN LA UNIVERSIDAD COLUMBIA

NUEVA YORK, 28 de Septiembre de 1990.

Cuando a mediados del siglo XVIII un grupo de ciudadanos ilustrados de la ciudad de Nueva York decidió fundar un establecimiento para educar a sus jóvenes en los estudios clásicos y en las ciencias, también en Santiago de Chile un pequeño grupo de ciudadanos ilustrados fundaba nuestra primera universidad.

Los fundadores de King's College y de la Universidad de San Felipe aspiraban a que el conocimiento y la ciencia tuvieran por objeto no sólo el dominio de la naturaleza, sino también, y muy principalmente la comprensión y la felicidad del ser humano.

Esas pequeñas universidades del siglo XVIII han crecido y se han hecho tan complejas como el desarrollo de las ciencias, pero sus principios fundadores continúan siendo su horizonte.

Es para mí un gran honor ser recibido por una de las más antiguas y prestigiadas universidades de Estados Unidos, y es una responsabilidad ser invitado como presidente de la República de Chile.

Es en la universidad, donde residen principalmente la responsabilidad de conservar y acrecentar constantemente el conocimiento. Es aquí donde la experiencia humana y la naturaleza son sometidas a la observación y al análisis para desentrañar su potencial y su sentido más profundo.

No vengo hoy día a hablarles desde la ciencia. Vengo a hablarles desde la experiencia, desde una experiencia particular que sin embargo se funda en valores universales. Vengo a compartir con Uds. la historia reciente de una nación que ha luchado por la paz con las armas de la paz, de un pueblo que ha amado con tesón la libertad. Y quisiera hacerlo aquí, en este hogar del saber, porque como hombre y como presidente de Chile, creo que el mayor valor de esta experiencia no reside en ser un interesante modelo para el estudio de las transiciones a la democracia, sino en la opción ética y moral que ha hecho nuestro pueblo por la paz, la justicia y la libertad.

En esto reside la clave más profunda para comprender por qué este proceso ha sido exitoso y, en más de un sentido, ejemplar. Los chilenos nos sentimos orgullosos del proceso democrático que estamos viviendo. En ese orgullo no existe un atisbo de arrogancia, porque la recuperación de la democracia no ha sido fruto de un golpe de suerte, ni del genio de unos cuantos iluminados, ni en la derrota fortuita de nadie; sino que ha sido hija del dolor, de la perseverancia y de la madurez de un pueblo, avalado por su larga tradición.

Los rasgos más sobresalientes de nuestro proceso de transición y consolidación de la democracia, encuentran su explicación en características esenciales de la vida nacional forjadas a lo largo de la historia de Chile.

Ciertamente, la transición chilena exigió cambios profundos en el pensamiento y actitudes de los chilenos, cambios que tuvieron origen en los desafíos planteados por dieciséis largos años de autoritarismo y en las lecciones que los chilenos extrajimos del quiebre institucional de 1973.

Pero la forma en que el pueblo de Chile asimiló esos desafíos y lecciones, está íntimamente ligada a los rasgos más permanentes de nuestra cultura nacional.

Entre esos rasgos sobresale el valor que desde muy temprano adquirió en Chile la idea democrática. Los historiadores concuerdan en que el sistema político chileno fue el primero en consolidarse en Latinoamérica, luego de las luchas por la independencia. Ello permitió que desde los inicios se encontraran mecanismos para dirimir los conflictos de poder dentro del sistema y no fuera de él.

La organización democrática chilena en el siglo XIX, dentro de las limitaciones que tuvo no solo en Chile sino en todo el mundo, permitió formas de participación y adhesión a través de las cuales el país pudo enfrentar con relativa flexibilidad los desafíos económicos y sociales que significaba la progresiva inserción de Chile en el sistema internacional.

La democracia chilena demostró su vigor con ocasión del conflicto fratricida que asoló al país en 1891. En efecto, ella logró imponerse con gran fuerza y fue capaz de superar rápidamente las fracturas legadas por la guerra civil.

Ese mismo vigor volvió a manifestarse, con posterioridad, en la breve etapa de inestabilidad política y autoritarismo que se inició en 1924 y finalizó en 1932, en una situación de acelerado cambio social y en el contexto de una crisis económica mundial que azotó a Chile con inusitada fuerza.

Desde entonces y hasta 1973, nuestra democracia reguló la

vida política nacional, proporcionando un cauce para el desarrollo de un dinamismo social y económico cuya envergadura era inédita en la historia de la república.

Durante el período autoritario que se inició en 1973, la idea democrática no perdió su fuerza ni su enraizamiento en la sociedad. En los años inmediatamente posteriores a la ruptura institucional, la acentuada polarización e intensidad del conflicto político que el país venía padeciendo, se proyectó en las fuerzas políticas democráticas, empobreciendo una actividad que, por las condiciones dictatoriales que imperaban, tenía que asumir modalidades subterráneas de existencia sin poder alcanzar expresiones políticas socialmente relevantes.

No obstante, desde muy temprano los ideales democráticos se hicieron presentes en una gran diversidad de fenómenos sociales y culturales.

Con timidez al comienzo, pero con creciente pujanza y perseverancia después, florecieron innumerables iniciativas protagonizadas por artistas, dirigentes sociales, sacerdotes, intelectuales organizados en centros independientes, juristas, periodistas, militantes políticos de base, sindicalistas y miles de hombres y mujeres que solo poseían en común la aspiración a desembarazarse de la opresión autoritaria y recuperar para Chile y su gente, la democracia.

Ello fue una clara prueba de que la historia del país no había transcurrido en vano y que las instituciones republicanas, tan duramente criticadas en esos años, habían ido sedimentando en la sociedad una cultura democrática capaz de sostenerse sobre sus propios pies, aún en una situación donde el viento de la historia parecía haber barrido para siempre con ellas.

Hacia 1983, cuando los partidos políticos chilenos comenzaban a recuperarse tras una década de represión y hostigamiento, ya se habían conquistado algunos espacios, modestos pero significativos para la libertad y la dignidad humana. Entonces, la sociedad civil se convirtió en protagonista de un proceso de movilización social que mes a mes desafió al autoritarismo a través de diversas formas de protesta, variables según las circunstancias y características propias de cada grupo social.

Esa fase de la transición chilena presenta una gran complejidad. Ciertamente, planteó dilemas morales y políticos que esperamos que una democracia ya consolidada no permita que jamás vuelvan a repetirse. Desde el inicio de ese proceso, la mayoría de las fuerzas opositoras al autoritarismo persiguieron encauzarlo a partir del principio de la no violencia, enfatizando la necesidad de utilizar solo formas pacíficas de protesta, como único medio moralmente justificado, convencidos de que la violencia solo trae consigo el efecto de alimentar a la violencia.

Por desgracia, no solo la existencia de organizaciones políticas opositoras sustentadas en visiones militaristas y violentas de la política, sino también una cruel represión masiva desatada por el autoritarismo, especialmente contra los sectores populares, hicieron de esa movilización un proceso que tuvo para Chile y su gente un alto precio de muerte, sufrimiento y dolor.

Todo ello nos permite afirmar que la transición chilena tiene un protagonista colectivo, que trasciende a los actores individuales: el pueblo de Chile y su gente.

Si el protagonista principal de la lucha democrática chilena ha sido su pueblo y su gente, es necesario destacar en segundo lugar el papel de los partidos políticos. Esta es otra de nuestras particularidades.

Sin partidos vigorosos, herederos de largas tradiciones y premunidos de una considerable madurez histórica, no habríamos podido erigir ante el autoritarismo una lógica política de entendimiento, negociación y búsqueda de una solución pacífica de los conflictos, superior a la **lógica de la guerra** que caracterizó la acción autoritaria. Sin partidos vigorosos no habríamos podido dotar al proceso de transición de la sabiduría política capaz de combinar la prudencia y la cautela con la firmeza en los principios, de evaluar adecuadamente los riesgos y las oportunidades, de saber cuándo transigir y cuándo hay que perseverar. Sin estos partidos, no habríamos podido movilizar más de siete millones de chilenos, equivalentes a más del noventa por ciento de los electores potenciales, para que se inscribieran en los registros electorales y votaran en un plebiscito sobre cuya limpieza asistían fundadas dudas, ni culminar victoriosamente dos campañas electorales en condiciones de adversidad.

Los partidos políticos chilenos siempre se han planteado frente a los grandes problemas nacionales a partir de una visión ética que aspira a ser coherente. Tradicionalmente, nuestros partidos han concebido la conquista del voto popular como un proceso de confrontación de ideas, donde los recursos publicitarios son elementos secundarios. Espero que seamos capaces de preservar este rasgo de nuestra cultura política, sin caer, so pretexto de una pretendida modernidad, en un envilecimiento de la vida política.

Ciertamente, durante los años sesenta de este siglo esta característica se distorsionó. Todos los partidos cayeron en ideologismos extremos, que anularon la capacidad de entendimiento recíproco y de negociación. Ello explica, en gran medida, el quiebre institucional de 1973. El aprendizaje hecho durante los años de autoritarismo ha permitido superar esa distorsión, como lo prueban las negociaciones y acuerdos que culminaron en las

reformas constitucionales plebiscitadas en 1989, y el surgimiento de la Concertación de Partidos por la Democracia, hoy gobernante, una coalición inédita en la historia política chilena en razón de la amplitud del arco de partidos que incluye, la envergadura de su proyecto y su voluntad de proyección en el tiempo.

Esa atenuación del ideologismo y esa convergencia de programas y objetivos que caracteriza a la acción de los partidos políticos chilenos contemporáneos, han permitido el surgimiento de un nuevo estilo de hacer política en nuestra patria.

Si hubiera que caracterizar muy resumidamente este nuevo estilo, podría decirse que sus rasgos distintivos son los siguientes:

Primero, un fuerte énfasis en el respeto al pluralismo, tanto en la vida social como política; segundo, un quehacer político que parte de la premisa del reconocimiento de los otros, distintos de uno mismo, como personas dotadas de derechos que no pueden ser conculcados en la acción política, lo cual admite como legítimo tener adversarios, pero jamás enemigos; y tercero, una voluntad compartida por aliados y adversarios de buscar los más amplios consensos posibles para la solución de los grandes problemas nacionales, especialmente evitando la partidización respecto de cuestiones que trascienden a las fuerzas políticas, como las relaciones exteriores, la defensa nacional y la proyección económica de Chile.

Como bien se sabe, nuestra lucha por la democracia estuvo orientada por una idea fundamental: la defensa de los derechos humanos y la conquista de una democracia capaz de reestablecer su pleno imperio en Chile. Nuestra lucha no fue una mera respuesta instintiva y reactiva a la opresión autoritaria. Desde sus inicios, tuvo un fundamento ético que le dio su pleno sentido y su más cabal legitimidad. Este fundamento ético, sustentado en los valores consustanciales a la dignidad humana y concretado en la meta de defender los derechos humanos, caló hondo en el alma de Chile y su gente. La defensa de los derechos humanos y la repulsa frente a su violación, no ha sido el patrimonio de unos pocos. Ha sido la actitud compartida por la abrumadora mayoría del pueblo chileno.

En una medida muy importante, la sociedad chilena tiene que agradecer a la Iglesia Católica no solo la acción perseverante y sistemática en defensa de los derechos humanos y el auxilio a las víctimas, sino igualmente el haber rescatado ese contenido moral básico de la vida social.

Ello fue posible también porque en nuestro país la democracia ha sido entendida, desde muy temprano, preñada de un sentido ético que la define como el marco político necesario para la realización de la dignidad humana.

Por eso, la democracia para nosotros es más que una mera técnica de administración de la sociedad y sus conflictos. Es sinónimo de oportunidades de progreso material y espiritual, de una creciente mayor equidad en las relaciones económicas y sociales, de libertades cada vez más difundidas al conjunto de los ciudadanos. En suma, sinónimo de un marco político que favorece la **vida buena**.

Al definir conjuntamente con la Concertación de Partidos por la Democracia las tareas básicas que mi gobierno está desarrollando con el objetivo de consolidar la democracia chilena, más que a abstracciones o teorizaciones generales, hemos prestado atención a estas continuidades históricas fundamentales, elementos esenciales del patrimonio cultural de la nación, que sucintamente he procurado bosquejar para ustedes. Especialmente, ha sido nuestra voluntad recuperar para Chile y su vida política ese sentido ético fundamental que sucesivas generaciones, a lo largo de muchas décadas, impregnaron en la idea democrática.

Tal como lo expresé ante el Congreso Nacional el veintiuno de mayo de este año, al reestablecer una antigua costumbre que hace de esa fecha la ocasión en que el presidente de la República se dirige al país para dar cuenta de su gestión anual, las tareas básicas de mi gobierno son, aparte de la reinserción plena de Chile en la comunidad internacional, las siguientes:

1. Esclarecer la verdad y hacer justicia en materia de derechos humanos, como exigencia moral ineludible para la reconciliación nacional.
2. Democratizar las instituciones.
3. Promover la justicia social, corrigiendo las graves desigualdades e insuficiencias que afligen a grandes sectores de chilenos.
4. Impulsar el crecimiento económico, desarrollo y modernización del país.

Ciertamente, la consolidación de la democracia chilena exige que haya una paz sólida y estable entre los chilenos, de modo que desaparezca toda forma de violencia. Para lograrla, no podemos ignorar la situación de derechos humanos que existió en el país durante el autoritarismo, pues equivaldría a negar el significado moral que nuestra cultura política otorga a la idea democrática.

La conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad y que se haga justicia en la medida de lo posible, para arribar finalmente a la hora del perdón. El principio que nos guía

en esta materia, que ha orientado las diversas medidas que hemos adoptado y que adoptaremos en el futuro, armoniza los imperativos éticos con los requerimientos políticos. La consolidación de la democracia chilena nos impone, en nuestra tarea de gobernante, conciliar la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia. Sólo procediendo así seremos fieles a nuestra tradición.

En segundo lugar, la construcción de una democracia sólida y estable requiere que perfeccionemos nuestras instituciones, para que la participación sea real en todos los niveles ciudadanos.

Por ello, además de crear instituciones para promover la incorporación a todas las áreas de la vida nacional de las mujeres y los jóvenes, estamos impulsando la democratización del gobierno local y la creación de instancias descentralizadas, comunales y regionales, para acercar las autoridades y las decisiones públicas a los ciudadanos.

También, estamos estudiando políticas que permitan una administración de justicia eficiente y oportuna. La administración de justicia en Chile ha adolecido por décadas de serias deficiencias, agravadas durante los años de autoritarismo, cuya suma ha desembocado en una profunda crisis que afecta con particular intensidad a los sectores más desposeídos. Solo una administración de justicia eficiente y oportuna puede reestablecer un efectivo imperio de la ley y la vigencia del sentimiento de justicia en las relaciones interpersonales cotidianas, garantizando la seguridad del conjunto de la sociedad.

Para el sentir mayoritario de mis compatriotas, la idea democrática posee una clara connotación de justicia social. Ello puede no ser así en otras latitudes y otras realidades nacionales. Es posible que haya quienes sostengan concepciones de la democracia no solo despojadas de ese contenido de justicia social, sino que en el extremo niegan la validez misma de la idea de justicia social. Discrepamos con esas concepciones. Ellas empobrecen la idea democrática, cercenándola de una parte muy importante de su sustrato ético y privándola de su capacidad de movilizar el entusiasmo y la energía de toda la nación a través de la visión de una sociedad mejor y más justa.

Para el pueblo de Chile y su gente, democracia significa tanto libertad como justicia social. Este es un hecho colectivo, que encuentra fundamento en nuestra historia y tal vez se explica por las condiciones sociales y materiales que caracterizan al país.

En los últimos años, Chile ha experimentado un crecimiento económico y modernizaciones importantes en diversos sectores de la actividad nacional. Sin embargo, esa situación positiva coexiste con la presencia de desigualdades muy profundas. Si ellas persisten, corremos el riesgo de consolidar dos países distintos y

antagónicos: uno, el Chile de los que tienen acceso a la modernidad y a los frutos del crecimiento; y otro, el de los marginados, socialmente excluidos de la vida moderna, convertidos en una carga para la sociedad.

La tarea de avanzar hacia una mayor justicia social debe cumplirse simultáneamente con un proceso sostenido de crecimiento económico.

El motor primordial del crecimiento reside en la empresa privada. El rol del Estado ha experimentado una redefinición. Esta es una tendencia mundial, que se manifiesta hoy con gran vigor aún en aquellos países de economías que hasta ayer eran centralmente planificadas. En armonía con esta realidad, el Estado democrático que queremos consolidar busca regular la actividad del mercado mediante normas generales, de aplicación universal, y se abstiene de intervenciones puntuales, erráticas y frecuentes, cuyo único efecto es desorganizarlo e introducir elementos de ineficiencia que, al acumularse, terminen por detener el crecimiento.

Hoy en día, la economía chilena es una economía abierta, y se mantendrá así, porque los chilenos sabemos que, en las actuales condiciones de la economía mundial, es la mejor estrategia para lograr un crecimiento sostenido.

Pero es evidente que no es posible avanzar en el camino del crecimiento sin avanzar a la vez en el camino de la equidad. Para crecer, se necesita trabajo, disciplina, perseverancia, paciencia, voluntad de emprender y unidad, y ello solo puede conseguirse en un clima de justicia social, donde todos se sientan partícipes no sólo del esfuerzo, sino también de los frutos de ese crecimiento. Igualmente, avanzar en el camino de la equidad significa integrar cada vez a más y más chilenos en el esfuerzo del desarrollo, lo que exige dar preferencia a la inversión en las personas, vivienda, salud y educación.

Estos son nuestros desafíos. En ellos estamos empeñados.

No puedo menos que sentirme orgulloso como gobernante de recoger una tradición que desde muy temprano dotó a la democracia chilena de un profundo sentido moral, haciéndola sinónimo del orden político adecuado para el cabal respeto y desarrollo de la dignidad humana, y que también desde muy temprano intuyó que la causa de los más desposeídos era armónica con la causa de una nación pujante, en constante crecimiento, capaz de proporcionar a sus hijas e hijos el marco adecuado para una vida cada vez más humana.

Es a partir de esa tradición que mi gobierno, convocando a todos los habitantes de la patria, persevera en la tarea de

consolidar la democracia chilena, concebida no como el plácido puerto de llegada después de una travesía que enfrentó tiempos tormentosos y oscuros, sino como el puerto de partida hacia una aventura nacional que convoca todos nuestros esfuerzos, para construir una sociedad cada vez más buena, más libre, más justa y más próspera.

* * * * *

NUEVA YORK, 28 de Septiembre de 1990.

MLS/EMS.